



Consejo de Seguridad

Distr. general
13 de enero de 2004
Español
Original: inglés

Carta de fecha 8 de enero de 2004 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Le escribo en relación con mi carta de 9 de octubre de 2003 (S/2003/1003).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el tercer informe adjunto de la República Dominicana, presentado en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Inocencio **Arias**
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo



Anexo

[Original: español]

**Carta de fecha 2 de enero de 2004 dirigida al Presidente del
Comité contra el Terrorismo por el Representante Permanente de
la República Dominicana ante las Naciones Unidas**

En relación a su comunicación de fecha 3 de octubre de 2003, contenitiva de algunos comentarios y preguntas relativos a la aplicación de la resolución 1373 (2001), surgidos del examen por el Comité contra el Terrorismo del informe complementario presentado por la República Dominicana en abril del 2003, tengo a bien remitir adjunto la información adicional solicitada (véase el apéndice).

(Firmado) Marino **Villanueva Callot**
Embajador, Representante Permanente

Apéndice*

Respuestas

Cuestionario del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad para la aplicación de la resolución 1373 (2001)

Secretaría de Estado de Finanzas

Como parte de las medidas de prevención que la República Dominicana está adoptando para implementar controles ante la práctica de actos de terrorismo, existe la Ley 72-02 que controla el lavado de activos provenientes del tráfico lícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves, en su artículo No. 8 que prohíbe sacar más de US\$10,000.00 dólares o su equivalente en pesos y en caso de llevar la suma antes mencionada la persona debe declararlo.

En el sistema bancario se han implementado las medidas de conocer a los clientes, en el sentido de que al abrir una cuenta bancaria en moneda local o en dólares, se procede hacer una investigación para saber la procedencia del dinero.

La Secretaría mantiene su atención a todos los listados de medidas de seguridad.

Consejo nacional de drogas

Medidas de Aplicación

1.2 Además de las disposiciones que se encuentran en el proyecto de modificación del Código Penal que cursa en el Congreso Nacional, el Consejo Nacional de Drogas envió una comunicación a la Cámara de Diputados, copia de la cual se anexa (anexo A), conteniendo una serie de recomendaciones para que se incluyeran en el referido proyecto. Dichas recomendaciones son disposiciones que se encuentran en las diferentes convenciones de la que el país es signatario.

1.3 De acuerdo al artículo 40 de la Ley 72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras infracciones graves, los profesionales liberales son sujetos obligados y deben cumplir entre otras obligaciones con la identificación de sus clientes.

1.4 La autoridad Supervisora del Sistema Financiero se encarga de supervisar también este tipo de entidades las cuales deben cumplir con todas las obligaciones contenidas en el documento de Basilea y la Ley 72-02.

1.13 La Ley 72-02 en sus artículos del 61 al 66 hace referencia al procedimiento a seguir para la cooperación internacional. De la lectura de estos artículos se desprende que esta cooperación se hace en base al principio de reciprocidad y de los acuerdos multilaterales y bilaterales que se hayan suscrito en la materia y que hayan sido ratificados por el Congreso Nacional.

Se anexa copia de la Ley 72-02.

* Los anexos pueden consultarse en la Secretaría.

Además, se envía copia del Decreto mediante el cual se dispone el Reglamento de Aplicación de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras infracciones Graves, que podría servir para ampliar cualquier punto que considere necesario.

Secretaría de Estado de Interior y Policía

Medidas de Aplicación

1.8 La Ley No. 36 del 17 de octubre del 1965 y sus modificaciones regula lo que se refiere a la compra, venta, posesión, almacenamiento e importación de armas de fuego en la República Dominicana. Compete a las Fuerzas Armadas la compra, venta, importación, exportación y transporte de armas de guerra y explosivos.

1.10 La Ley No. 95 del 14 de abril de 1939 y sus modificaciones, prohíbe la entrada al país de las personas indicadas en su artículo 10.

1.11. El Código de Procedimiento Criminal de la República Dominicana, faculta a las autoridades judiciales a perseguir y juzgar a las personas que hayan cometido actos delictuosos en el extranjero y se encuentren residiendo en el país, sean estos nacionales o extranjeros.

Dirección General de Migración

Las decisiones relativas a Migración en la República Dominicana están contenidas en la Ley No. 95, del 14 de Abril de 1939, y su Reglamento de Aplicación No. 279, de fecha 12 de Mayo del 1939, que establece sanciones a todas las naves que transportan pasajeros clandestinos y que lo bajan a suelo dominicano con un monto de US\$2,500, equivalente a RD\$105,500.00, por cada sujeto clandestino y establece multas y sanciones para los inmigrantes clandestinos que penetran a territorio dominicano ilegalmente, por vía de las fronteras y las plataformas marítimas, y, finalmente el mandamiento de deportación administrativo, mediante un procedimiento sencillo y rápido. No obstante, los asuntos migratorios son de la competencia del Congreso Nacional según lo establece el Artículo 37.9, de la Constitución de la República, por lo que las modificaciones en este sentido deben provenir del Congreso de la República, lo cual impide a la Dirección General de Migración, per se, tomar decisiones de índole legales a través de Resoluciones Administrativas.

La Dirección General de Migración, ha establecido disposiciones de tipo administrativas tendentes a combatir el terrorismo y aquellos que proporcionen refugios con esos fines, tales como:

- I. Organización de Cursos, talleres y seminarios a todos los Inspectores Marítimos, Aéreos y Fronterizos, que refuerzan su formación para la lectura de documentos de viajes y especificaciones que puedan llevarlo a detectar falsificaciones e interposición de personas u otras irregularidades, lo cual ha sido posible con el aval proporcionado por las Embajadas de Estados Unidos, Argentina y Canadá.
- II. Creación en la Dirección General de Migración de un Departamento especializado sobre Falsificación e Investigación como complemento de la formación arriba indicada, el cual está dirigido por oficiales migratorios de alta preparación.

III. Creación del Área de Extranjería, departamento especializado en la Residencia de Extranjeros, que para otorgar la residencia dominicana a los extranjeros requiere una depuración a través de los organismos de Seguridad del Estado: Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), así como por la INTERPOL.

IV. Establecimiento de controles mediante lectores de documentos computarizados e instalación de máquinas de alta tecnología para hacer más transparente el acceso a cualquier área de migración de todos los viajeros que entren o salgan del Territorio Nacional.

V. Puesta en vigor del Proyecto de Regularización de Status de Trabajadores Extranjeros en la Capital de la República y en las diversas Provincias, con oficinas adscritas a las Gobernaciones Provinciales.

VI. Creación un Centro de Cómputos con ramificaciones en todas las oficinas de la Dirección instaladas en el país, el cual proporciona una información en detalle sobre personas.

Otras disposiciones jurídicas aplicables:

I. La República Dominicana tiene en vigor la Ley No. 344-98, de fecha 14 de agosto del 1998, que sanciona a todas aquellas personas que desde el territorio nacional o del extranjero se dediquen a planear, patrocinar, financiar u organizar, por cualquier medio o forma, la realización de viajes o traslados para el ingreso o salida ilegal de personas, desde o hacia el territorio nacional, sean nacionales o extranjeros, a los cuales castiga con pena de reclusión no menor de 20 años ni mayor de 30 años y multas de veinticinco mil pesos con 00/100 (rd\$25,000.00) a cien mil pesos con 00/100 (RD\$100,000.00).

II. La República Dominicana ha aprobado la Ley 137-03, sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, de fecha 07 de agosto del 2003, que establece sanciones criminales para el que trafique con seres humanos.

Las medidas de control migratorio han sido tomadas y se ejecutan junto con las medidas administrativas para impedir la penetración de terroristas a República Dominicana con intención de pasar a los Estados Unidos o a otras naciones del mundo.

Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores

En razón de la naturaleza y por la competencia de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores en materia de terrorismo, extradición, refugio y asilo, se refiere a continuación información de interés para el Comité.

Indicativo de la situación de la República Dominicana ante Instrumentos Internacionales en materia de Terrorismo y temas conexos

A. Vigentes

1. Protocolo sobre la Prohibición del Uso en la Guerra, de Gases Asfixiantes, Tóxicos o Similares y de Medios Bacteriológicos, del 17 de junio de 1925.

2. Acuerdo sobre Prohibición de Pruebas Nucleares en la Atmósfera, el Espacio Sideral y bajo el Agua, del 5 de agosto de 1963.
3. Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Actos cometidos a Bordo de las Aeronaves, del 14 de septiembre de 1963.
4. Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, del 14 de febrero de 1967.
5. Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, del 1° de julio de 1968.
6. Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, del 16 de diciembre de 1970.
7. Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando éstos tengan Trascendencia Internacional, del 2 de febrero de 1971.
8. Tratado sobre Prohibición de Emplazar Armas Nucleares y otras Armas de Destrucción de los Fondos Marinos Oceánicos y su Subsuelo, del 11 de febrero de 1971.
9. Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, del 23 de septiembre de 1971.
10. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción, del 10 de abril de 1972.
11. Convención sobre la Prevención y el Castigo de los Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, del 14 de diciembre de 1973.

B. Firmados y en proceso de estudio

1. Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, del 17 de diciembre de 1979.
2. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 17 de julio de 1998.
3. Convención para la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, del 13 de enero de 1993.
4. Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) del 10 de septiembre de 1996.
5. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del 15 de noviembre 2000.
6. Convención Interamericana Contra el Terrorismo, del 3 de junio del 2002.

C. En estudio

1. Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, del 10 de marzo de 1988 (con fines de adhesión).
2. Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, del 14 de noviembre de 1997.
3. Convención Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, del 15 de diciembre de 1997.
4. Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, del 6 de julio de 1999.
5. Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, del 9 de diciembre de 1999.
6. Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 15 de noviembre del 2000, del 31 de mayo del 2001 (con fines de firma).
7. Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los fines de Detección, del 1 de marzo de 1991.

Vale señalar que el orden legal interno dominicano, en materia de terrorismo, dispone de los artículos 95, 96, 265 al 267, 434 al 437 del Código Penal, copia de los cuales se anexan.

Con relación al asilo, el refugio y la extradición, la República Dominicana se encuentra vinculada a los siguientes instrumentos internacionales:

1. Código de Derecho Internacional Privado, del 13 de febrero de 1928, anexo al Convenio de Derecho Internacional Privado, del 20 de febrero de 1928.
2. Convención sobre Extradición, del 26 de diciembre de 1933.
3. Convención sobre Asilo del 20 de febrero de 1928.
4. Convención sobre Asilo Político del 26 de diciembre de 1933.
5. Convención sobre Asilo Diplomático del 28 de marzo de 1954.
6. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 28 de Julio de 1951.
7. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados del 31 de enero de 1967.

Respecto a la extradición cabe anotar además que el Estado dominicano dispone de la Ley No. 489 del 22 de octubre de 1969, modificada por la Ley No. 278-98 del 29 de julio de 1998, y de los términos de las mismas se apreciarán los requerimientos para ponderarse, solicitarse, concederse o no, procedimientos a seguirse, documentación exigibles, autoridades responsables y demás aspectos.

El Presidente de la República, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República constituyen las autoridades competentes en materia de extradición.

A continuación, en esta oportunidad se transcriben artículos de las referidas leyes, de interés para el Comité, a saber:

Artículo 2.– Las extradiciones procederán y se tramitarán en los casos y de acuerdo con los procedimientos establecidos en los tratados y en esta ley.

Artículo 3.– Aunque no haya tratados, las extradiciones podrán ser solicitadas o concedidas por el Estado Dominicano, de conformidad con el principio de la reciprocidad y la práctica del Derecho entre los Estados.

Artículo 4.– (Modificado por la Ley 278-98 del 29 de julio de 1998) El Poder Ejecutivo es competente para conceder la extradición de un dominicano en los casos en que exista Convenio de Extradición entre el Estado requeriente y el Estado Dominicano donde quede consignado el principio de reciprocidad y cuando la solicitud del Estado requeriente se refiere a:

“Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y el lavado de bienes provenientes de esta actividad, asesinato, secuestro, estupro, sustracción o seducción de menores de quince (15) años, comercio carnal o proxenetismo, robo con violencia, falsificación de monedas, estafas, delitos relativos al tráfico de objetos históricos y arqueológicos y la piratería aérea.”

Párrafo I.– La presente disposición se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios de extradición vigentes que consignent esta facultad a cargo del Poder Ejecutivo.

Párrafo II.– En los convenios de extradición suscritos por el Estado Dominicano con otros Estados, cuando se conceda la extradición de un nacional, no se le aplicará una pena mayor a la máxima establecida en el país, que, al momento de la aplicación de esta Ley, es de treinta (30) años.

Artículo 35.– (Agregado por la Ley 278-98 del 29 de julio de 1998) En caso de contradicción de la presente Ley con los tratados de extradición vigentes, convenidos entre el Estado Dominicano y otros Estados, prevalecerán los tratados.

Sobre el Asilo es oportuno precisar que el Estado dominicano reserva este tema a la exclusiva potestad del Presidente de la República con la asesoría de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, tomándose en cuenta los tratados al respecto ya citados.

Con relación al Refugio es pertinente indicar que el mismo se maneja sobre la base de la Convención sobre los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, anteriormente citados, y bajo la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), establecida por Decreto No. 1569 de 15 de noviembre de 1983, y cuyo funcionamiento está regulado por el Reglamento No. 2330 del 10 de septiembre de 1984. Tal Comisión está integrada por la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, que la preside, y por la Secretaría de Estado de Trabajo, Procuraduría General de la República, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Policía Nacional, Dirección General de Migración y Departamento Nacional de Investigaciones.

Anexo: dispositivos legales citados